

La representación de partidos políticos y movimientos sociales

Entre lo brillante y lo oscuro

—» CATALINA JIMÉNEZ

Historiadora. Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Docente e investigadora en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Introducción

Una de las palabras exquisitas de la política es *crisis*. A partir de ella políticos y politólogos —que no son lo mismo— buscan, unos de forma desesperada y otros con ayuda de la teoría y la comparación, fórmulas para resolver una situación que siempre parece que terminará de colapsar los sistemas políticos que se han configurado después

de las transiciones políticas. Ahora bien, las crisis parecen ser de diversos tipos, algunas de arraigo económico o institucional, otras en clave exterior e inclusive ideológica, pero entre todas ellas destaca una que parece común a todos los habitantes del continente: la representación política.

Por lo tanto, indagar el lado brillante y el oscuro de la crisis de representación política en los últimos años permitirá ver no solo las capacidades y estrategias de partidos y movimientos, sino cómo estos en momentos han actuado de forma articulada profundizando con ello los atributos de la polarización. Sin embargo, una representación controlada por un líder popular con vínculos clientelares e inclusive con capacidad coercitiva puede llevar esa articulación a una zona oscura en la que la democracia puede debilitarse y erosionar los atributos de su régimen político.

Esta situación se explica por la apuesta que las transiciones políticas hicieron respecto a la profundización de la representación política, situación que vigorizó a la sociedad civil, la que a través de movilizaciones y estructuración de movimientos sociales ha logrado emerger y consolidarse como un actor político necesario para la democracia y con un elevado grado de legitimidad para los ciudadanos.

Por ello, no extraña que resultados de informes como el del Latinobarómetro (2015, p. 55) evidencien que la asistencia de ciudadanos latinoamericanos a manifestaciones autorizadas «se ha duplicado de 13 % a 27 % entre 2005 y 2015 y a las no autorizadas, es

decir sorpresivas o que realizan repertorios de acción con algún elemento violento, han pasado del 3 % al 21 % en los mismos años».

Si las voces en la calle aumentan, los datos afirman que las voces representadas a través de los partidos disminuyen de forma importante en términos de desafección y confianza en la representación. De acuerdo con el informe del 2015 del IDD-Lat, la percepción sobre la confianza en la representación a partir de los indicadores *partidos políticos en el Poder Legislativo, accountability y desestabilización de la democracia* disminuye de forma importante en 14 países de la región cuyos ciudadanos consideran que el transfuguismo, un sistema de partidos con débil institucionalización, la corrupción, la poca efectividad de los líderes partidistas y el incumplimiento de las promesas de campaña debilitan esta situación.

Ese fenómeno contrasta con la información sobre la consistencia de las votaciones, ya que «el promedio de participación electoral en las 82 elecciones presidenciales que se han realizado en el continente entre 1995 y 2014 ha sido de un 69,5 %» (Latinobarómetro, 2015, p. 26). Por lo que el problema no está en la participación sino en quién y cómo se representa el interés político de los ciudadanos.

En medio de esa contradicción, la explosión de la movilización y el fortalecimiento de movimientos sociales en diversos países de la región se explica en el marco de la implementación del modelo económico neoliberal, que en su adelgazamiento de las competencias del Estado y la consolidación de

agentes económicos transnacionales, reconfiguró viejas demandas en relación con la implementación de políticas públicas sociales sectoriales. A la vez, abrió la oportunidad a nuevas demandas como la ambiental, de género o animalistas, que en un contexto global, fueron creando discursos glociales al incorporar, en sus acciones, proclamas y formas organizativas, características culturales propias del territorio o país donde impactan.

Ese escenario de movilizaciones debe entenderse más allá de la crisis, y ver a esta como «la posibilidad de nuevos retos e interrogantes sobre el futuro de la democracia y ello implica repensar los cimientos sobre los cuales se sustenta» (Yagenova, 2014, p. 40). Ahora bien, ese espacio ganado por los movimientos sociales durante las últimas décadas ha tenido alcances diferentes, ya que los movimientos han apostado a pasar de ser vistos como incómodos y profanos instigadores de los asuntos públicos por su carácter informal y débil institucionalización, a estructurar apuestas de mayor envergadura política donde «cumplen como proponentes o catalizadores del cambio sociopolítico» (Somuano, 2007, p. 41).

En ese sentido, los movimientos sociales en la última década han venido con: «todas sus complejidades y matices nacionales desarrollando una visión más proactiva que abre la posibilidad de nuevas alternativas, negociaciones, a partir especialmente de la defensa y promoción de la vida y la diversidad» (Svampa, 2006, p. 143).

Esa potencia de los movimientos sociales latinoamericanos ha permiti-

do dos situaciones. La primera es descrita por autores muy cercanos a los discursos emancipatorios y críticos al modelo económico neoliberal, como Boaventura De Sousa Santos (2006, p. 8), para quien «es innegable el papel que los movimientos sociales han ayudado en el proceso de *democratizar la democracia*, en el sentido de ampliar libertades y derechos, ya que una verdadera democracia no puede limitarse a una lógica instrumental y de procedimiento».

La segunda parece una opción más pragmática, en la medida en que ponen el acento de sus demandas en la precariedad de lo público y por ello la necesidad de replantear, más que el modelo económico, una reconstrucción del Estado actual y la capacidad de este en términos además de construcción de política pública, no solo en un nivel nacional sino subnacional. De allí el importante número de movilizaciones regionales a las que se adiciona un carácter étnico, ambiental o campesino.

Sin embargo, es importante señalar que en el interior de los movimientos «las relaciones fluctuantes de los miembros de las movilizaciones pueden ir de la cooperación a la competencia e incluso el conflicto abierto» (Corcuff y Mathieu, 2009, p. 19), situación que incide en alguna de las tres posturas de decisión de los movimientos: mantenerse en oposición a las políticas del gobierno de turno, mantener la movilización constante, lo cual implica enormes costos para los colectivos que forman parte de esta, o competir a través de las vías electorales por una cuota de poder.

Esta última puede darnos indicios de la brillantez u oscuridad que el acercamiento entre partidos políticos y movimientos sociales puede lograr en un continente de paradojas institucionales, débiles crecimientos económicos, experimentos ideológicos, inversiones extractivas a gran escala e importantes tasas de inequidad y pobreza.

Ese acercamiento entre partidos políticos y movimientos sociales no es nuevo o producto de las transiciones políticas exclusivamente; de hecho, muchos de los partidos políticos que emergieron a partir de la década de los treinta del siglo pasado tuvieron en la relación con sindicatos y colectivos sociales una amplia base que les permitió consolidarse con las transformaciones mismas de cualquier organización política; ejemplo de ello fue el peronismo en Argentina o el caso del PRI en México.

Ese tipo de relaciones pueden ser clasificadas en cinco tipos, según tres situaciones: primero, la fuerza sociopolítica de los dos tipos de organizaciones; segundo, las demandas y objetivos que se logren negociar entre ellas; y tercero, el resultado mismo del proceso político. Es decir, o se logran ganancias electorales o se fortalece una de las dos organizaciones durante el proceso de construcción de esta relación.

El politólogo Michael Hangan reconoce que la primera relación es la *articulación*. Esta consiste en que las organizaciones de los movimientos sociales se agrupan alrededor del programa de un partido político y promueven las posiciones partidistas entre los

seguidores potenciales, que pueden a su vez ser potenciales votantes. En este caso, aunque el partido tiene cierto control, las organizaciones sociales tienen capacidad de incidencia sobre las decisiones, lo que lleva necesariamente a una relación en la que todos ganan. La segunda es la *permeabilidad*. En este caso, las organizaciones infiltran a los partidos políticos con un cálculo político de éxito que permitirá a los miembros del partido orientarlos hacia el movimiento social. Dicha presión tiene como fin lograr una amplia incidencia dentro del partido y en casos extremos apoderarse de él. La tercera es la *alianza*, en que facciones de partidos y movimientos sociales negocian y colaboran en asuntos específicos pero cada una de las organizaciones mantiene su autonomía y libertad de acción y estrategia de presión. La cuarta es la *independencia*, en la que los movimientos actúan autónomamente de los partidos, presionándolos con la potencial pérdida de votos si no se aceptan las concesiones que los miembros de las organizaciones sociales quieren. Por último, la *transformación*, en que los movimientos sociales pasan a ser partidos políticos consiguiendo importantes avances electorales.

Ahora bien, la importancia de que se produzcan estas relaciones debe leerse en dos tendencias. La primera, en cuanto a la calidad de la democracia, entendida esta como profundización de las formas de participación política y el respeto de los Gobiernos a las movilizaciones y organizaciones sociales de diversa pléyade, profundizado el régimen de la democracia par-

tipicativa e inclusive directa y popular en algunos casos; capaz, además, de elevar críticas más fundamentadas a las elites políticas tradicionales, debilitando con ello el anquilosado discurso de clase marxista que pareció caracterizar al continente.

La segunda, en cuanto al resultado para la gobernabilidad, entendido este como la capacidad de incidir no sólo en los procesos electorales sino en consolidarse como un actor político fundamental en el sistema político, a tal punto que los sistemas de partidos, la conformación de los Legislativos y la negociación de la política pública tengan una carga de representación y participación de estos movimientos sociales que pueden llegar a evidenciar cambios significativos en la cultura política de los países latinoamericanos.

De esta forma podemos descubrir lo brillante y lo oscuro que puede resultar para la estabilidad y gobernabilidad de los países el acercamiento de estas dos organizaciones políticas y con ello la necesidad de entender tanto a partidos como a movimientos desde ópticas menos ideológicas y más favorables para la construcción de un diálogo político más amplio en cada uno de nuestros países.

El lado brillante de la relación partidos-movimientos

Si bien la naturaleza de los movimientos sociales es disruptiva y desafiante frente al statu quo establecido por las elites políticas institucionales, también es evidente que se han convertido en ca-

nales legítimos de amplios sectores de la sociedad, dando forma a nuevas identidades y discursos políticos que enriquecen el régimen democrático y fortalecen el grado de flexibilidad que deben tener todos los sistemas políticos.

» Si bien la naturaleza de los movimientos sociales es disruptiva y desafiante frente al statu quo establecido por las elites políticas institucionales, también es evidente que se han convertido en canales legítimos de amplios sectores de la sociedad «

En el caso chileno, la irrupción en 2011 de la movilización estudiantil puede ser considerada como un punto de inflexión en el proceso de transición política. La revitalización del griterío en la calle en un contexto de índices de crecimiento económico alto puede «interpretarse más como la consecuencia de una crisis de expectativas generada, asociada a los problemas de legitimidad presentes en la sociedad de ingreso medio, y a dos promesas incumplidas del modelo de desarrollo: frustración de la movilidad ascendente vía educacional y la persistencia de patrones estructurales de profunda desigualdad» (Luna, 2014, p. 39).

No es extraño entonces que fuera el movimiento estudiantil el que liderara las voces de desencanto y desafección. Compuesto por federaciones estudiantiles articuladas en la Confederación de

Estudiantes de Chile (CONFECH), apostó a partir de una organización más horizontal y deliberativa a la operacionalización de repertorios de acción novedosos y desafiantes, que llegaron a contar con la solidaridad de diversos sectores de la población chilena.

Sin embargo, el movimiento también tuvo un fuerte matiz político, debido a la cercanía de sus máximos dirigentes con sectores del Partido Comunista, mientras que otros sectores del movimiento tenían vínculos con la izquierda autónoma, organización con profundas diferencias con el Partido Comunista, partido que no se encontraba en el sistema partidario de centroizquierda, conocido como la Concertación.

De esta manera, el movimiento estudiantil, el Partido Comunista y otros sectores moderados o reformistas como la Red Democrática o la Red Liberal pertenecientes a sectores de las elites políticas, comparten su insatisfacción por la política institucional y la ausencia en la renovación de las elites para establecer negociaciones que reflejen los cambios sociopolíticos en la sociedad chilena. La unión de estos sectores para presionar al Gobierno, a pesar de las diferencias ideológicas internas y de la lucha de cada organización por mantener su autonomía, resultó eficaz después de más de ocho meses de acciones contenciosas y de negociaciones.

Si bien la movilización no logró un resultado efectivo a sus demandas en el 2011, demostró a partidos políticos y organizaciones sociales el poder de la movilización, la irrupción de «nuevos» actores políticos y las falencias de

un sistema que se percibía a sí mismo como exitoso. Durante 2012 y 2013, el movimiento estudiantil, compuesto por fuerzas heterogéneas, después de múltiples discusiones internas no logró transformar su éxito político hacia la creación de un nuevo partido político, razón por la que las diversas facciones estudiantiles se plegaron a su organización política con el fin de plantear una estrategia distinta.

En este contexto, la Concertación tomó una decisión audaz que terminó por debilitar al movimiento estudiantil: incluir al Partido Comunista en las fuerzas que lo estructuran para de esa manera tener capacidad de decisión sobre el movimiento y sobre los líderes que emergieron de ella. De esta forma, líderes como Camila Vallejo, Karol Cariola, Giorgio Jackson y Gabriel Boric terminaron siendo candidatos a las elecciones por los partidos políticos en los cuales habían militado antes de ser parte del movimiento estudiantil.

Por tanto, las facciones estudiantiles que representaban cada uno de estos líderes entraron en una relación de *articulación* con los partidos políticos, en que los estudiantes, usando el tema de la reforma educativa, incidieron en las decisiones programáticas del partido, a tal punto que la reforma educativa se convirtió en el asunto más importante para la campaña de Bachelet. A su vez, al convertirse en cabeza de lista, los estudiantes lograron mantener a sus activistas con cierto grado de autonomía respecto de la facción del movimiento al que pertenecían y con los votos permitieron la supervivencia del partido y la consolidación del Par-

tido Comunista dentro de la Concertación, o lo que se llama ahora Nueva Mayoría.

El resultado de la *articulación* fue la elección de los cuatro líderes por un amplio número de votos en cada uno de sus distritos. Así, la apuesta del movimiento estudiantil fue el uso de las vías electorales para lograr negociaciones más certeras con las elites políticas tradicionales respecto a la reforma educativa. En enero de 2015 el Congreso de Chile aprobó el proyecto de *reforma del sistema educativo*, que entró en vigor en marzo de 2016.

Dramático es tal vez el caso boliviano. La *transformación* del Movimiento al Socialismo en partido político se logró no solo por la fuerza acumulada de años de movilización de colectivos campesinos, indígenas, mestizos, mineros y cocaleros, sino por la estructura de oportunidad política que brindaron el Gobierno y las elites políticas bolivianas incapaces de acoger las demandas sociales, víctimas de un síndrome común en la región: «un profundo alejamiento entre la sociedad y los partidos y la creciente devaluación de los procesos electorales y de las instituciones representativas» (Luna, 2014, p. 41).

Así, las organizaciones sociales de base constituidas en territorios indígenas, mineros y agrícolas, así como líderes sindicales, se propusieron desde la década de los noventa crear un instrumento político que les permitiera una acción política que trascendiera la movilización, cuyos resultados habían sido parciales. Al no poder participar a través del «instrumento político por

la soberanía de los pueblos» debido a la normativa del Código Electoral, el movimiento decidió acudir a las urnas a través de un partido político pequeño pero registrado en la Corte Electoral, y ganó cuatro escaños. Asistimos al surgimiento del partido político MAS, que logró amalgamar a un sinnúmero de organizaciones sociales pero especialmente a las seis confederaciones cocaleras de Cochabamba.

En las elecciones de 2000, el candidato Evo Morales logró un elevado número de votos y quedó segundo después de Gonzalo Sánchez de Lozada. Este fue depuesto en 2003, luego de una fuerte movilización social liderada por la organización de Morales, quien bajo el lema «contra la erradicación de la coca, por la estatización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente» se opuso al llamado *impuestazo*, un impuesto directo, progresivo y no deducible con que el Gobierno esperaba mejorar el déficit fiscal.

En el tránsito en que Carlos Mesa gobernó el país, mientras se llamaba a elecciones anticipadas, el partido MAS logró convertirse no solo en una importante fuerza dentro del Parlamento sino que los vínculos con diversos actores sociales se fortalecieron y extendieron a lo largo del país. De esta manera, el proceso representó «un cambio en la estrategia política de la izquierda del país, al decidir cambiar en su búsqueda por el poder de una movilización masiva a una electoral, dentro del marco institucional del sistema democrático liberal existente» (Somuano, 2007, p. 49).

Así, la estrategia de Morales y de su partido redituó en tácticas políticas con el partido gobernante; logró que algunos de los militantes fueran invitados a formar parte del Gobierno, fortaleciendo su posición dentro del sistema político y con ello la posibilidad de lograr por vía electoral respuesta a las demandas de la sociedad boliviana. En ese orden de ideas, el triunfo de Evo Morales en las elecciones anticipadas en diciembre de 2005, con el 53,74 % de los votos frente al 28,59 % de su opositor Jorge Quiroga, puede ser considerado el punto más álgido e importante de esta transformación de movimiento social a partido político.

Si bien el Gobierno de Evo Morales ha sido objeto de múltiples críticas respecto a ciertos rasgos de populismo, discursos antiimperiales, clientelismo, políticas económicas desafiantes y fuertes tensiones políticas, la supervivencia del MAS en el sistema de partidos ha transformado también al sistema político boliviano. Este reconoce hoy la pluralidad de su sociedad, expresada en la carta constitucional de 2009.

Por lo tanto, estos ejemplos de relación entre movimientos sociales y partidos políticos —de articulación en el caso chileno y de transformación en el boliviano— pueden ser considerados exitosos en la medida en que lograron para las organizaciones sociales respuesta a las demandas a partir de las cuales se habían formado.

Sin embargo, para que esa respuesta fuera duradera en términos de política pública, ambos movimientos optaron por la arena política a través de las elecciones y por formas configurativas

con partidos institucionalizados, como fue el caso de Chile, o por la creación de uno nuevo, que hasta ahora parece sobrevivir y consolidarse en el sistema de partidos boliviano.

Esta relación permitió que ambos actores políticos lograran ganancias políticas para sus seguidores, así como la elección de nuevos líderes partidistas que permiten debilitar esa dinámica perversa de desafección de los ciudadanos frente a la representación política.

Si bien es una brillantez que debe considerarse con cuidado para que no se pierda la perspectiva, es necesario señalar que cuando se presentan ese tipo de articulaciones existen mejoras en los indicadores respecto a la calidad de la democracia y en el fortalecimiento de los diseños institucionales establecidos, al preferirse la vía electoral y la cooperación antes que la confrontación, y al lograr con ello resultados tangibles.

Ahora bien, apuestas como estas pueden ser consideradas como un desincentivo para los movimientos sociales. Sin embargo, el sostenimiento del movimiento depende más de la capacidad organizativa de sus miembros, entendida como reclutamiento de miembros, fortalecimiento de vínculos con organizaciones sociales de base, uso de repertorios de acción que les permita mantenerse como voz esencial para los decisores políticos y registros continuos de sus opiniones por los medios de comunicación, con el fin de lograr una identificación significativa de los ciudadanos con sus demandas y discursos.

El lado oscuro de la relación partidos-movimientos

Aunque es evidente que en las últimas décadas el descrédito de los partidos políticos parece ser un incentivo para la consolidación de los movimientos sociales, dichos recursos no terminan fortaleciendo a los actores involucrados y al sistema político mismo; al contrario, estos terminan cooptados hacia modelos políticos que debilitan seriamente la institucionalidad del sistema y del régimen político, y consolidan liderazgos con rasgos autoritarios. Es el caso de Venezuela.

El punto de inflexión del sistema político venezolano tiene nombre propio: Hugo Chávez. Cuando su nombre surgió con los destellos del Caracazo de 1989 y el posterior intento de golpe de Estado en 1992, el desarrollo de los movimientos sociales en Venezuela estaba atomizado en torno a demandas como los DESC, el movimiento vecinal, el de mujeres y algunos de trabajadores y estudiantes con vínculos cercanos al COPEI o a AD. Por lo tanto, no habían condiciones para un movimiento social significativo y construido en torno a una demanda común.

La atomización, ausencia de capacidad organizativa de las organizaciones sociales, crisis del sistema de partidos y la implementación del modelo neoliberal crearon las condiciones para que Chávez construyera en torno a su figura y a través del Movimiento Quinta República, una *articulación* con múltiples organizaciones sociales sin distinción ideológica ni de clase social, que le permitió «ganar las elecciones.

Pero no representaban cabalmente ni lo que él pretendía a través del partido ni a las organizaciones de los sectores sociales de Venezuela» (Fermín, 2008).

De esa manera, la elección de Chávez significó una ganancia tanto para los movimientos como para el partido del nuevo presidente, ya que instrumentalizó las diversas demandas sociales a través de su programa de gobierno. Sin embargo, en ese proceso terminó por cooptar a los líderes hacia el nuevo partido, y con ello a potenciales votantes, creando un elevado número de militantes dispuestos a mantener al líder a través de la participación en los diversos procesos electorales propuestos, incluyendo referendos, o por la vía de la movilización social, incluso con repertorios violentos como se evidenció en el intento de golpe de Estado a Chávez el 11 de abril de 2002.

Desde su posesión en 1999 hasta 2007, el gobierno de Chávez construyó fuertes vínculos con las organizaciones sociales a lo largo de todo el país. Constituyó estructuras que terminaron acompañando las políticas públicas del Gobierno revolucionario y que tuvieron graves efectos para la autonomía de los movimientos sociales, insertos en la estructura gubernamental-partidista y de incentivos económicos que la prosperidad petrolera dejó en esos años.

Así, los comités de tierra urbana y rural en el marco de la política de vivienda, el de salud inserto en el programa de Barrio Adentro, los comités de alimentación MERCAL, los de protección social para apoyar la misión Negra Hipólita, la misión Sucre, la Fuerza

Bolivariana de Trabajadores, la de mujeres o la estudiantil se erigieron como organizaciones sociales con naturaleza de movimiento social en su organización y acción, pero cooptados por los incentivos partidarios, económicos y sociales que brindaba la renta petrolera.

El periodo 1999-2007 puede calificarse como «de espera esperanzada, pues estos porfían en sus ilusiones ante el nuevo cuadro político, por lo que una y otra vez posponen su agenda de luchas y reivindicaciones propias a favor de aquella que se les impone, donde lo principal es mantener y consolidar el control del poder estatal del chavismo» (Méndez, 2010).

Esa articulación profunda entre partidos y movimientos puede analizarse de dos formas: la primera, como el fortalecimiento de una concepción de democracia participativa que permitió un conocimiento más amplio de los ciudadanos de mecanismos de participación y competencias de *accountability* social que incidían directamente en decisores y políticas públicas. La segunda, como una creciente desinstitucionalización de la representación política a través de las fuerzas partidarias y con diferencias ideológicas que golpearon el régimen democrático en su esencia misma. El Gobierno redujo los espacios de oposición y mantuvo la popularidad y simpatía de los ciudadanos a través de políticas populistas y el uso de violencia hacia los opositores, acciones que terminaron por evidenciar el lado oscuro de esta relación.

A partir del 2007, la oscuridad es completa cuando la relación se con-

vierte en una *transformación*, al crearse el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el cual desdibujó la escasa autonomía que tenían los movimientos sociales con el fin de lograr un control total ante cualquier descontento social, el que debía pasar primero por las instancias locales, regionales o nacionales del partido de gobierno. A ello se sumó la baja de los precios del petróleo, que golpeó duramente la estructura subsidiaria que se había consolidado en ese país.

Resulta paradójico que cuando el chavismo más busca control ante una potencial conflictividad social desestabilizadora del régimen es cuando «se despliegan con creciente fuerza reivindicaciones colectivas silenciadas por largo tiempo» (Méndez, 2010).

El incremento del autoritarismo del régimen a través del adelgazamiento de la protección de derechos civiles y políticos, el aumento del descontento social expresado en divergencias entre los líderes sociales del movimiento sindicalista, de mujeres, campesino e indígena, y el creciente y constante fortalecimiento de partidos y organizaciones de oposición evidencian que «la cantidad de acciones de protesta se han incrementado, y también se ha acentuado la represión violenta a las manifestaciones de diversa índole» (Méndez, 2010).

Abierta la estructura de oportunidad política para los colectivos divergentes al oficialismo, la protesta pareció aumentar no solo en número sino en diversidad de actores, y desde la muerte del líder en 2013 pareció agudizarse dramáticamente. De acuerdo

con el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el 2013 se presentaron «4410 protestas, a una razón de 12 por día; en 2014, 9286 protestas, cifra inédita equivalente a 26 protestas diarias. En 2015 se registraron 5851, es decir, 16 protestas diarias, y en lo que va del 2016 se ha llegado a 641, equivalentes a 21 protestas diarias».

No es solo la movilización de la oposición a través de la Mesa de Unidad Democrática y sus principales líderes, sino sectores estudiantiles universitarios, campesinos, sindicatos e inclusive sectores barriales empiezan a visibilizar no solo la difícil situación económica de Venezuela sino la incapacidad del gobierno de Nicolás Maduro para hacer frente a los diversos problemas políticos e institucionales que tiene un régimen sin dinero. Así, la crisis económica impactó duramente en las políticas sociales que habían venido debilitándose pero que en los últimos años han sido determinantes en la inestabilidad y debilidad de la gobernabilidad del presidente Maduro.

De esta manera, la relación entre partido político y movimientos sociales, fundamental para el mantenimiento en el poder del chavismo, ha venido desapareciendo, a tal punto que salir a la calle a protestar contra el régimen o expresarle inconformidad parece permitir la recuperación de la autonomía de los movimientos sociales. Sin embargo, es importante señalar que estos hechos oscurecen el panorama, debido al uso recurrente de repertorios de acción violenta por los colectivos sociales ante la crisis de representación, la desinstitucionalización alcanzada por

los años del oficialismo en el poder, la respuesta violenta a la protesta y la desafección que los ciudadanos oficialistas o no oficialistas parecen sentir por el sistema político actual.

» Esta articulación profunda entre partidos y movimientos puede analizarse de dos formas: la primera, como el fortalecimiento de una concepción de democracia participativa [...]. La segunda, como una creciente desinstitucionalización de la representación política a través de las fuerzas partidarias «

Finalmente, la oscuridad respecto a las relaciones entre partidos y movimientos sociales en el caso venezolano puede iluminarnos sobre los peligros que entraña la cooptación de la movilización social por liderazgos populistas, que terminan instrumentalizando esos recursos, demandas y capacidad de presión en la consolidación de sus intereses partidistas o personales, con graves implicaciones para el régimen democrático mismo, así como para los diseños institucionales y la participación política, elementos fundamentales para el desempeño de un sistema político, que puede oscilar entre la brillantez o la oscuridad dependiendo de las relaciones establecidas y los actores políticos que hacen ese tipo de apuestas.

Conclusiones

La transición a la democracia que vivió el continente durante las últimas décadas en clave representación-gobernabilidad permitió la amplificación de mecanismos de participación política y el incremento de la participación ciudadana a través de movimientos sociales, que han llegado a consolidarse como actores políticos fundamentales. En ese sentido, mientras la representación institucional partidista parece hacer crisis en toda la región, los movimientos han venido fortaleciendo su voz y acción política, profundizando con ello la calidad de la democracia y la gobernabilidad de los sistemas políticos.

Pese a que parecen actores dicotómicos, partidos y movimientos en el continente han trabajado de forma conjunta con el fin de estructurar apuestas de mayor envergadura desarrollando visiones más proactivas, donde se apunta a la defensa de sus demandas, así como la capacidad de presión e incidencia en la formación de políticas públicas, pero no al costo de la gobernabilidad o de una fuerte crisis institucional. De esta forma se identifican cinco formas de relación: articulación, permeabilidad, alianza, independencia y transformación. Según sean el régimen establecido, el diseño institucional y la capacidad del sistema, la relación puede terminar en un sendero hacia la brillantez o hacia la oscuridad.

En primer lugar, cualquiera de las relaciones que se pueda presentar entre estos dos actores políticos debe

entenderse no solo como una profundización de las formas de participación política, sino que esta permite cambios en el sistema de partidos, en la conformación de los Legislativos y especialmente en la negociación de la política pública, por lo que estas formas de interrelación pueden desincentivar formas de movilización violenta a unas más cooperativas, en las que partidos y movimientos puedan ganar no solo capacidad de negociación sino incentivos políticos, institucionales e inclusive simbólicos. De esta forma, la apuesta de los movimientos de acercarse al poder por la vía electoral parece reeditar en un mejor posicionamiento dentro del sistema político y en resultados tangibles para los miembros de los movimientos sociales respecto a sus demandas.

En segundo lugar, entender la acción de partidos y movimientos desde ópticas menos ideológicas y más favorables a la construcción de un amplio diálogo político puede explicar dos ejemplos de relación brillante o positiva, como es el caso de la articulación del movimiento estudiantil chileno o la transformación del MAS de movimiento a partido político en Bolivia. Ambos convirtieron sus demandas en parte de contenidos programáticos partidistas y lograron no solo el éxito electoral sino respuesta a sus demandas y el sostenimiento de sus propias organizaciones sociales dentro del sistema político.

En tercer lugar, las relaciones prácticas que los movimientos han establecido con los partidos políticos, especialmente en momentos electorales o bajo el ejercicio de implementación

de políticas, puede verse como un inventivo respecto a la calidad de la democracia y el empoderamiento de la sociedad civil, elemento fundamental para los ciudadanos, quienes, a pesar de la desafección hacia los partidos, siguen considerándolos legítimos para el ejercicio democrático.

En cuarto lugar, en ocasiones estas relaciones terminan cooptadas hacia modelos políticos que debilitan seriamente la institucionalidad del sistema y el régimen político, pues consolidan modelos autoritarios o populistas que, en su necesidad de mantenerse en el sistema, terminan usando a los movimientos sociales como instrumentos de legitimación de su poder político; y estos, a su vez, reciben los incentivos del régimen debilitando la autonomía propia de los movimientos y con ello su capacidad estratégica. Ese es el caso de la articulación y transformación que se presentó desde 1999 hasta la actualidad entre el partido oficialista y los movimientos sociales en Venezuela.

Por último, las estrategias de relación que movimientos y partidos han usado para lograr la consolidación de sus agendas, demandas y organizaciones requirió de cierta flexibilidad de los sistemas políticos, que han entendido que los movimientos pueden ser explicados más allá de una línea ideológica; es decir, como una forma de acción política con la misma legitimidad que los partidos. Por ello, entender cuándo, cómo, por qué y qué resultados dan ese tipo de relaciones permite explicar no solo el funcionamiento del sistema político. Al hacerse en visión cooperativa y no confrontativa, estas relaciones

apuntan a la mejora del régimen democrático, la deliberación ciudadana, la redefinición del campo sociopolítico y la gobernabilidad que puede oscilar entre lo brillante y lo oscuro.

» ...estas formas de interrelación pueden desincentivar formas de movilización violenta a unas más cooperativas, en las que partidos y movimientos puedan ganar no solo capacidad de negociación sino incentivos políticos, institucionales e inclusive simbólicos «

Bibliografía

- CORCUFF, P., y MATHIEU, L. (2011). «Partidos y movimientos sociales: de las ilusiones de la “actualidad” a una puesta en perspectiva sociológica». *Revista Cultura y Representaciones Sociales*, vol. 5, n.º 10, pp. 7-27.
- CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO (2015). *Informe Latinobarómetro 1995-2015*. Disponible en: <www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2015/15817.pdf> [consulta: 1.6.2016].
- DE SOUSA SANTOS, B. (2006). *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social*, Buenos Aires: CLACSO.
- FERMÍN, J. (2008). «Venezuela: ¿qué pasa con los movimientos sociales?», en Centre tricontinental (CETRI), <www.cettri.org>

- cetri.be/Que-pasa-con-los-movimientos?lang=fr» [consulta: 1.6.2016].
- HANGAN, M. (1998). «Social Movements, incorporation, disengagement and opportunities. A long view», en GIUGNI, M., D. MC ADAM y C. TILLY (eds.). *From Contention to democracy*. Lanham: Rowan and Littlefield publishers.
- LUNA, J. (2014). «¿Crisis de legitimidad en Chile? Movilizaciones sociales y sistema político», en BARRERO, F., et al. *Movilización social y representación política en países de Latinoamérica: Colombia en perspectiva comparada con Chile y Perú*, pp. 35-51. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer.
- MÉNDEZ, N. (2010). «Movimientos sociales en Venezuela: en el arduo camino de la autonomía». Ponencia en congreso por el centenario de la Confederación Nacional del Trabajo, en Córdoba, España. Recuperado de <<https://www.nodo50.org/ellibertario/PDF/Expo-LIBCordoba.pdf>> [consulta: 1.6.2016].
- OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (2016). *Informe 2013-2016*. Disponible en: <<http://www.observatoriodeconflictos.org.ve>> [consulta: 1.6.2016].
- POLILAT - FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER (2015). *Informe IDD-Lat*. Disponible en: <<http://www.idd-lat.org/2015/informes/142/ii-dimensin-calidad-institucional-y-eficiencia-politica.html>> [consulta: 1.6.2016].
- REVILLA, M. (2010). «América Latina y los movimientos sociales: el presente de la “rebelión del coro”». *Nueva Sociedad*, n.º 227, pp. 51-67.
- SOMUANO, F. (2007). «Movimientos sociales y partidos políticos en América Latina: una relación cambiante y compleja». *Política y Cultura*, n.º 27, pp. 31-53.
- SVAMPA, M. (2006). «Movimientos sociales y nuevo escenario regional: las inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina». *Revista Sociohistórica*, n.º 19, pp. 141-155.
- YAGENOVA, S. (2010). «Reflexiones en torno a los movimientos sociales, el Estado y la democracia», en YAGENOVA, S., J. ASCENCIO, B. GAROZ y M. KAJKOK (eds.). *Los movimientos sociales frente al Estado, la democracia y los partidos políticos*. Guatemala: FLACSO.